



El Gobierno obligará ahora a usar mascarillas

Atiende la petición de las comunidades que exigían extender su uso a espacios públicos

RAÚL PIÑA MADRID

El Gobierno emprende un nuevo giro. Si en un principio, con la pandemia por el coronavirus golpeando ya con dureza a España, no se obligó al uso generalizado de mascarillas —ni siquiera se recomendaban a la población en general—, el Gobierno va a regular ahora el uso obligado de éstas en los espacios públicos. Así lo anticiparon ayer la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de que fuera una petición casi unánime de los presidentes autonómicos en la nueva reunión que mantuvieron con Pedro Sánchez. Regulará sobre la «conveniencia de hacer uso obligatorio de las mascarillas en los lugares públicos».

Hasta ahora, el Ejecutivo sólo había estipulado como obligatorio el uso para todos los usuarios del transporte desde el 4 de mayo.

El Ministerio de Sanidad lleva días trabajando en una orden que obligue al uso de las mascarillas en espacios públicos como la calle, toda vez que de momento su discurso se ciñó a una recomendación, que intensifica en aquellos espacios en donde no se pueda respetar la distancia de seguridad de 2 metros. Pero hasta ahora sólo eran recomendaciones. En las próximas horas, Sanidad publicará una orden donde regulará sobre la obligatoriedad de su uso.

«Existe un consenso amplio en

que hay que reforzar la obligatoriedad de su uso», desgranó Illa. «Hay una unanimidad en que hay que reforzar su uso», añadió, anticipando que el asunto puede sustanciarse en la reunión que hoy mantendrá con las comunidades. Madrid, Cataluña, Murcia, País Vasco, Cantabria o Asturias, entre otras regiones, pidieron con reiteración su obligatoriedad.

En el protocolo sobre el uso de mascarillas elaborado por Sanidad, con fecha del 20 de abril, se señala que el uso de mascarillas en población general puede «servir como un medio de control de la fuente de infección al reducir la propagación en la comunidad ya que se reduce la excreción de gotas respiratorias de individuos infectados que aún no han desarrollado síntomas o que permanecen asintomáticos». Asimismo, estipula que «se podría considerar el uso de mascarillas en la comunidad, especialmente cuando se acude a zonas con mucha gente, espacios cerrados como supermercados, centros comerciales, o cuando se utiliza el transporte público, etc.», pero no llega a establecer un uso obligatorio.

Este texto argumenta que «no hay aún un consenso claro respecto al uso de mascarillas médicas en el ámbito comunitario a nivel internacional para la prevención de la infección por SARS-CoV-2», además de destacar que la OMS «no recomienda el uso de mascarillas médicas en



Íñigo Urkullu pidió ayer un marco legal entre Gobierno y comunidades. EFE



Ximo Puig habló de un marco europeo de seguridad sanitaria para el turismo. EFE



Alberto Núñez Feijóo pidió que ambos padres pueden salir con los menores. XUNTA

la población general, aunque reconoce que cada país adopte un enfoque basado en el riesgo y beneficio».

No obstante, el pasado 30 de abril, la OMS se mostró abierta al uso de mascarillas por parte de la población general, aunque matizó que debe ir acompañado de medidas como el distanciamiento social.

Además de reiterar la petición de hacer obligatorio el uso de mascarilla en los espacios públicos, los presidentes autonómicos urgieron ayer a Pedro Sánchez a que fije ya los criterios de reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones que anunció hace dos semanas. La crisis económica y social derivada de la sanitaria acrecienta la necesidad de las autonomías de acceder a liquidez.

Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Juanma Moreno (Andalucía) pidieron definir ya los criterios de reparto para poder disponer del fondo antes del verano. Los ba-

Las comunidades apremian para acceder a los 16.000 millones prometidos

rones del PP mostraron su temor sobre qué puede considerar Hacienda gasto vinculado a la lucha contra la pandemia de la Covid-19 y qué no.

Miguel Ángel Revilla (Cantabria) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) solicitaron que a la hora de abordar el reparto se tenga en cuenta el esfuerzo en Sanidad que en el pasado han hecho las comunidades y que esa inversión ha supuesto ahora que la pandemia tenga un impacto menor que el esperado.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, advirtió de que va a presentar una reclamación al Estado de 4.000 millones por el gasto extra que, considera, ha generado en su comunidad la lucha contra el coronavirus.

Un Gobierno a la altura de España

FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS

Las elecciones del 10-N dejaron claro que la fortaleza que el Gobierno de España precisaba para solucionar retos como la cohesión territorial solo se podía conseguir con un pacto PSOE-PP. Sus 208 diputados —218 con Cs— hubieran dado solidez para plantear con éxito respuestas constitucionales y legales —generosas, y firmes— que permitieran cerrar las heridas en Cataluña, superar la honda fractura de su sociedad y asegurar la lealtad de la Generalitat al resto de España. Una respuesta, en resumen, que hiciese a Cataluña no solo parte sino incluso vanguardia de la modernización de España para lo que queda de S. XXI.

Todas esas soluciones se alcanzarían mejor con un Gobierno que debería dialogar, y mucho, con todas las fuerzas catalanas, pero cu-

ya continuidad no dependiera de partidos independentistas. Sánchez tenía que haber aplicado toda su energía al gran pacto PSOE-PP. Ambas formaciones representan aquí a las fuerzas que en Europa forjaron el contrato social entre socialdemocracia y liberalismo político y democrático, un equilibrio que ha producido décadas de prosperidad y cohesión social. Ambos partidos han asumido el gobierno durante 40 años y, con su alternancia, han ido construyendo, con más luces que sombras, la democracia y el progreso de nuestro país.

La ética de la responsabilidad obligaba a los dos partidos y a sus líderes a hacer ese esfuerzo: tanto PSOE como PP gobernaron en varias legislaturas con el apoyo del nacionalismo catalán, sin prestar la necesaria atención a cómo este desarrollaba, en una deriva inexplicable, su labor de gobierno en Cataluña. Los dos deberían haber sumado sus fuerzas para dar la mejor respuesta al mayor reto que se había encontrado la España democrática: ese entendimiento hubiera sido una experiencia importantísima en la consolidación y fortalecimiento de nuestra democracia.

Sánchez y Casado habrían podido salvar sin dificultades las posibles reticencias entre

algunos de sus militantes y cuadros convencidos de que la negociación e inteligencia pragmáticas y la minimización de la polarización eran y son el mejor marco para la socialdemocracia, el liberalismo y la democracia cristiana. Como ha escrito recientemente Carlos Sánchez, el pragmatismo «es fruto del coraje que da el sentido de la responsabilidad».

Una gran coalición, pivotando en el centro y la moderación, podría aprovechar esta etapa histórica para solucionar otros importantes retos, como el de la educación. No podemos seguir con un fracaso escolar tan elevado y con indicadores tan bajos de calidad en el informe PISA año tras año. Para encarar los desafíos del futuro, ser emprendedores, innovadores y competitivos, generar empleo de calidad y sostener un Estado de bienestar modélico, urge mejorar radicalmente nuestro sistema educativo y convertirlo en cuestión de Estado. A los países que lo han hecho, los datos son incontestables, les va mucho mejor.

Si esa coalición era conveniente hace cinco meses, la crisis sanitaria y socioeconómica actual hace que la falta de visión y altura de miras que la impidió resulte hoy aún más perjudicial. Un Gobierno con la solidez de tan am-

plio apoyo se habría enfrentado a la pandemia con más anticipación y eficacia en lo sanitario y tendría ahora más capacidad de sumar esfuerzos públicos y privados ante la urgente recuperación económica; pero el factor catalán, la célebre mesa, acaparó lamentablemente las primeras semanas del Ejecutivo (enero-febrero). Esos días habrían sido clave para reaccionar a tiempo ante la tormenta que amenazaba al mundo, pero nuestro Gobierno tenía su campo de visión ocupado por otras urgencias.

Y ahora, ¿qué cabe hacer? De entrada, crear un clima favorable a grandes y amplios acuerdos. Porque lo que era conveniente tras el 10-N se ha convertido en necesario. Para ser una democracia madura, hay que dejar atrás el frentismo, las tácticas cortoplacistas y de tierra quemada. El presidente Sánchez se equivocó el 11-N, pero está a tiempo de corregir el rumbo y sentar las bases para la España del S. XXI. Un país con un futuro espléndido que merece una gran coalición capaz de sostener un Gobierno cuya gestión tenga el bien común y el interés general como únicas guías.

Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga (PP), diputado en las Cortes Constituyentes (UCD)